

C. INSERCIONES

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CARRIO

Ampliación de la exposición de la señora diputada acerca del proyecto de ley sobre régimen del *habeas data*

La ley de protección de datos y el *habeas data*, que hoy se someten a la consideración de esta Cámara de Diputados tienen que ver con una cuestión mucho más profunda que se enmarca en la tan vieja como el mundo relación entre el saber y el poder, entre las enormes potencialidades del poder para determinar el régimen de la mirada, de la disciplina del control sobre los demás a través del saber, pero también

de las enormes transformaciones que el saber y la información han tenido en la era tecnológica, y, eventualmente también el descentramiento del poder que ello produce y las implicancias que para el sujeto entendido como razón, memoria y libertad, encarna la amenaza tecnológica en términos de impacto sobre su propia vida privada.

Pero es a la vez algo mucho más profundo que, me gustaría que analicemos en el seno de esta Cámara de Diputados, cual es el enorme cambio del estatuto del saber en lo que hemos de llamar la cultura y la

sociedad informatizada posmoderna. Si hay algo que resulta evidente a fines del siglo XX es que las técnicas han cambiado profundamente, pero además tienen un hecho que las nuclea, y es que todo el avance de la técnica está basado en el lenguaje, la fonología, las teorías lingüísticas, los problemas de la comunicación y la cibernética, las álgebras modernas, la informática, los ordenadores y sus lenguajes, los problemas de traducción de los lenguajes y la búsqueda de compatibilidades entre lenguajes máquinas, los problemas de la memorización y los bancos de datos, la telemática, y la puesta a punto de terminales inteligentes, la paradología; he aquí testimonios evidentes del cambio tecnológico apoyado en el lenguaje y, esto en cuanto a que la lista no es exhaustiva. Lo evidente es que el impacto tecnológico hace que hoy las operaciones de adquisición, clasificación, posibilidades de disposición y explotación de los conocimientos y de los saberes ha cambiado sustancialmente y es razonable pensar que la multiplicación de las máquinas de información afecta y afectará la circulación de los conocimientos, y afectará al hombre, tanto como lo ha hecho al desarrollo de los medios de circulación de hombres primero (el transporte), de sonidos e imágenes después (los medios).

En esta transformación general, la naturaleza del saber que va implicada en ello no queda intacta. No habrá conocimiento que no pueda ser traducido en cantidades de información. Se genera entonces una nueva relación entre los proveedores y los usuarios del conocimiento y del saber que tenderá a revertir la suma de productores y consumidores de mercancías, que es la forma de valor, del conocimiento y del saber. También el saber acerca de las personas será producido para ser vendido, y es y será consumido para ser valorado en una nueva producción. En ambos casos para ser cambiado. Se sabe que este saber, se ha convertido en términos de información en la principal fuerza de producción, de circulación, pero también de control de los hombres.

En la edad posindustrial y posmoderna, la situación de la información adquiere entonces en términos, no sólo de producción y de crecimiento, sino también de amenaza por el sujeto particular, una vía distinta y es que, es en tanto mercancía internacional indispensable para las potencias productivas, pero también para el control. Este será el embiste mayor y acaso el más importante en la competición mundial por el poder. Igual que los Estados-naciones se han peleado para dominar territorios y después para dominar la disposición y explotación de materias primas y de mano de obra barata; es pensable que se peleen en el porvenir por dominar las informaciones. Aquí se abre un nuevo campo para las estrategias industriales, comerciales, militares; pero también para estrategias políticas y de control. Este estado de mercantilización del saber y de circulación de la información que caracteriza a la era tecnocrática no va a dejar intacto tampoco al privilegio que los Estados-naciones modernos, detentan y detentaban en lo que concierne a la producción, a la difusión de conocimientos y al control de los haberes sobre las personas. Esto se ha llamado: proceso de descentramiento del poder, por descentralización y descentramiento de la misma información. Ambos supuestos y la explosión de esta nueva for-

ma del saber, que es el saber informático tiene una enorme potencialidad creadora y transformadora de las fuentes del saber, del conocimiento científico, de la producción, de la industria y del comercio. Pueden generar mayor transparencia en las acciones del Estado, tienen una virtualidad de explosión del mundo anterior y de transformación del mundo interior realmente inabarcable, pero al mismo tiempo pueden significar como todos los procesos de cambio una altísima amenaza para el sujeto atrapado de alguna manera, en el aparato de los mercados y en el enorme aparato tecnológico que ya no controla. Por ello, este tema fundamental se vincula además con la enorme crisis que se ha dado en llamar "crisis de la modernidad".

En efecto, la modernidad o proceso histórico de modernización se había presentado desde sus comienzos como un proceso emancipador de la sociedad, tanto desde la vertiente burguesa como desde su contraria que fue la crítica marxista. La primera se alimentó de los postulados de la Revolución Francesa, las doctrinas sociales del liberalismo inglés y del idealismo alemán, mientras que la segunda nace con la economía política de Marx y se extiende por todo el neomarxismo hasta la teoría crítica alemana. Para la razón ilustrada burguesa que nace de la lucha contra el Estado absoluto, la modernidad es la salida del hombre de su madurez, la llegada a su mayoría de edad, una filosofía que reclama la libertad individual y el derecho a la igualdad ante la ley contra la opresión estamental. Su tarea es la de construir un mundo inteligible, donde la razón institucionaliza el juego de las fuerzas políticas, económicas y sociales en base al libre contrato entre seres iguales. El Estado sólo tendrá un papel de árbitro conciliador entre el interés particular y el universal. Así la razón irá construyendo a través de la historia el proceso emancipador de la humanidad conjugando libertad y necesidad.

El fracaso de esta razón burguesa o del Estado burgués se pone de manifiesto a lo largo de los siglos XIX y XX en todos los aspectos deshumanizados y alienantes de la sociedad capitalista y da pie a la economía política de Marx. La reivindicación hegeliana del Estado moderno como manifestación más alta de la razón es para Marx una formulación ideológica, una reconciliación entre lo universal y lo particular pensada pero no real. La razón ilustrada burguesa en su plasmación real, estaba, por lo tanto plagada de contradicciones y era portadora por igual tanto de progreso como de destrucción. Sólo explicitando estas contradicciones y haciéndolas explotar se podría reconstruir la futura emancipación de la sociedad y a esa tarea se apresta toda la tradición marxista. Un poco más tarde, ya a principios de nuestra centuria, Weber se enfrentaba a la construcción del Estado alemán, es el primero en albergar la duda desconfiada hacia ambas emancipaciones, pero continúa el proceso histórico de modernización como proceso progresivo de racionalización.

A través de su análisis de las instituciones correspondientes a la progresiva racionalización, la economía capitalista, la burocracia y la ciencia empírica, profesionalizada muestra que la racionalización de la sociedad no conlleva por el contrario ninguna perspectiva utópica, de cualquier signo que ésta sea, sino que más bien conduce a un aprisionamiento progresivo del hombre mo-

derno en un sistema deshumanizado que se traduce en un crecimiento irreversible de la reificación. Weber, magistral, arguyó que la esperanza y afectación de los pensadores ilustrados fue una ilusión amarga e irónica. Estos sostuvieron que existía un vínculo fuerte y necesario entre el desarrollo de la ciencia, la racionalidad y la libertad humana universal. Pero cuando el legado de la ilustración, se extendió y fue desenmascarado se puso al descubierto el triunfo de la razón instrumental.

La razón instrumental es la forma de razón que invade toda la vida social y cultural abarcando las estructuras económicas, jurídicas, administrativas, burocrática y artística. Es ésta la informática expresión de esta razón instrumental. El crecimiento de la razón instrumental no conduce a la realización concreta de la libertad universal, sino como lo señalara Weber "a una jaula de hierro de racionalidad burocrática de la que nadie puede escapar". Dadas estas tendencias, Weber no consideró al socialismo ni como una alternativa viable a la sociedad capitalista de su tiempo ni como una fórmula capaz de resolver el reto de la razón, porque también escondía la misma semilla.

Así pues la paradoja de que la racionalización conlleva emancipación y reificación al mismo tiempo permanece irresuelta en la teoría weberiana y esta paradoja es la que van a tratar de resolver más tarde Adorno y Horkheimer en su *Dialéctica de la ilustración*. Es preciso reconstruir lo que de patológico tuvo el crecimiento de la razón instrumental. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el crecimiento desmedido, no de la razón moral sino de la razón subjetiva instrumental se ha convertido en la asistencia de la dominación tecnológica y ha reducido toda interacción a relaciones de poder. El avance de la tecnología, y en consecuencia todo el proceso del saber que es producido, circularizado y dirigido a través de los bancos de datos, supone la expresión de una era tecnológica que tiene que ver con aquel desarrollo de la razón instrumental y de aquella advertencia de Weber en el sentido de que el avance de la razón y sobre todo de la razón instrumental, conduzca en definitiva a una cárcel de hierro de la que nadie pueda salir.

El saber sobre las personas, la información sobre las personas ha sido desde el origen del mundo y sobre todo desde el origen de los Estados, la información necesaria para ejercer el control, la disciplina, para imponer lo que nosotros llamamos "el régimen de la mirada". Pero además, básicamente desde el siglo XV en adelante y sobre todo el siglo XVIII, esta información sobre las personas secretamente guardada por los Estados era la información que además permitía determinar las divisiones entre el bien y el mal. Pero también determinar los que estaban incluidos dentro de la otra división maniquea como la primera y que cruza toda la sociedad occidental en el sentido de la normalidad y de la anormalidad. Todos los Estados tuvieron siempre lo que se llamó, y como secreto de Estado, las informaciones referidas a los estatutos de la normalidad y a la anormalidad.

Pero frecuentemente en secreto justamente lo que estaba, lo que podía el reino de lo indeseable, de lo prohibido, de lo contestatario, de lo ideológicamente subversivo, de lo racionalmente indeseable, de lo racionalmente no

controlable, de lo estéticamente no estigmatizado. Este profundo régimen de la mirada, y de las informaciones del Estado —es en estas épocas—, donde la mayor amenaza para el individuo estaba justamente en ese potencial discriminador y de exclusión que partía justamente del potencial de información que provenía del Estado y que en muchos casos adquiría el carácter secreto. Fue en nombre de esas informaciones que se persiguió, que se encarceló, que se discriminó y que se excluyó a lo largo de todas las sociedades contemporáneas. Ahora pueden explicar ustedes por qué las normas de hábeas data, que significa "traer los datos a mi presencia", se articuló primigeniamente como un derecho público subjetivo. Como un derecho a ser ejercido frente al Estado, porque en la construcción de los siglos anteriores era el Estado a través de sus registros, quien tenía el eje monopolístico de la mirada, y en consecuencia el eje monopolístico del control, de la exclusión y de la discriminación. Lo que va a cambiar profundamente en la era tecnológica y a través del conocimiento como valor de cambio, y ya no como valor de uso, como mercadería a ser vendida, es justamente la privatización de estos registros de datos personales. Esto viene a robustecer además la nueva imagen de un descentramiento del poder estatal.

Es decir, el poder circula y el régimen de la mirada, de la disciplina y en consecuencia de control, circula ya por distintas fuentes del ejercicio del poder y en esta vieja relación de saber y poder. Esto también tiene que ver con la discriminación, con el estatuto de lo bueno y de lo malo, con el estatuto de la normalización, con el estatuto de lo normal y de lo anormal. Las nuevas empresas de bancos de datos privados encierran la misma amenaza, potencial informador por una parte, enorme potencial discriminador por la otra. Potencial discriminador para revelar ideología, para revelar raza, para revelar religión, para revelar la historia de los cuerpos, la historia de las vidas, las condiciones estéticas, los hábitos sexuales. Ya aquí, en este reino de la información, cada hombre, sujeto de emancipación por excelencia, va a ser así un sujeto, que por encontrarse en el nudo de las informaciones y de las comunicaciones va a ver penetrar esa información en su propia vida privada. Y, es esa información, la que podrá determinar su empleo, su crédito, su acceso al trabajo, su acceso a la ciudadanía. Formidable potencial de control, que en definitiva debe ser regulado mínimamente por el Estado para impedir justamente que la era tecnológica se convierta en la mayor amenaza para el sujeto en términos de vida privada protegida. Esta es la razón del hábeas data incluido en la Constitución Nacional, y que ahora paso a referir. La protección de la persona contra la falsificación, contra la manipulación, contra la no actualización, no sólo de registros de datos públicos sino también privados. Pero para que esta garantía fuera efectiva era necesario regular mínimamente esta actividad, terminar de una vez por todas con los secretos del Estado, con los bancos de datos del Estado no sujetos a control, y también regular pasando por el consentimiento privado, los bancos de datos que hoy proliferan sin ninguna regulación y control. ¿Es esto dirigido? No, es preservar mínimamente una esfera de vida privada protegida, es hacer

política de inclusión y no de exclusión, es evitar la discriminación y otorgar a los sujetos la posibilidad y las defensas jurídicas necesarias para no ser objeto de este nuevo panóptico de la comunicación que son las fuentes informáticas.

El hábeas data es una forma de protección de los derechos individuales de una trascendencia aún no vista con claridad por la sociedad en su conjunto; en endemos que va a ser una de las más grandes herramientas procesales de tutela sustancial del ordenamiento jurídico argentino. Se preguntarán ¿cuál es la razón por la cual una garantía procesal tal cual está establecida en el artículo 43 exija una ley reglamentaria tan amplia? El estudio de este instituto no puede circunscribirse a los aspectos meramente procesales de la cuestión, porque analizado exclusivamente desde este punto de vista es una modalidad más de la acción de amparo. Pero, lo que subyace al entramado de este esquema procesal constitucional es un instituto de fondo, que es la protección de los datos personales.

Como lo señalara en su oportunidad Jorge Reinaldo Vanossi, autor de un proyecto legislativo en este sentido, el hábeas data es una parte minúscula, una parte muy limitada de un tema mayor que tiene a su vez dos facetas: la faceta clásica o tradicional del derecho de la información y del manejo de ese derecho de la información, que ha evolucionado en el transcurso del tiempo y ha llegado a adquirir los ribetes y los perfiles que tiene en la actualidad; y por el otro, el impacto —porque la palabra es ésa— que ha causado la informática, la telemática y todos los medios modernos que se han incorporado a nuestro bagaje cultural. Estas innovaciones pueden servir para el bien o para el mal, la falta de control y la falta de recursos o de herramientas en manos de los particulares para poderse defender en caso de que exista realmente una desviación de poder en el uso de estos medios puede significar no sólo un perjuicio material sino una honda lesión a los derechos de la personalidad humana. El tema del hábeas data es un tema instrumental pero es un tema que está abiertamente referido a un capítulo muy importante de los derechos humanos y de la libertad de las personas; es el capítulo más cercano inherente a la personalidad y donde la sofisticación de los medios científicos contemporáneos puede llevarnos entonces a que el tipo de lesiones que sufra en esta materia adquiera un carácter de extrema peligrosidad y por supuesto de extrema perversidad.

Esta ley, en consecuencia, abarca el aspecto sustancial, en cuanto a la protección especial de los datos personales y al manejo de estos datos y una parte instrumental o procesal que tiende a reglamentar el tercer párrafo del artículo 43. Esta es la primera cuestión que hay que advertir para no entrar en confusiones, entendiendo que esta ley sólo regula la garantía procesal establecida en el artículo 43 de la Constitución Nacional. En efecto esta ley tiene aspectos de derecho sustancial relativos a la protección de los datos personales en garantía de derechos humanos fundamentales que hacen a la privacidad y al ejercicio de otros derechos constitucionales y aspectos

procesales o instrumentales que hacen a la efectividad de estas garantías que la ley acuerda.

La parte sustancial es de aplicación como ley nacional en todo el ámbito de la República y los aspectos procesales sólo son aplicables en el ámbito de la jurisdicción federal y nacional sin perjuicio de lo que dispongan las legislaciones procesales locales en mérito a lo estatuido por el artículo 5º de la Constitución Nacional. Sin perjuicio de advertir que ante la inexistencia de legislación procesal local específica el juez local no puede denegar el hábeas data sino que debe instrumentar el procedimiento para hacer efectiva la garantía operativa de carácter procesal establecida en el artículo 43, 3º párrafo.

La primera cuestión entonces, sería diferenciar los aspectos sustanciales de la ley de los aspectos meramente procesales:

Los aspectos sustanciales

Cada persona es un plexo de diversos estados o vínculos con otras personas, nacionalidad, sexo, antepasados, estado civil, nombre, situación económica y financiera, profesión, religión, costumbres, familias que conforman sus circunstancias. Todos estos datos volcados en un registro informático podrían servir para el chantaje o para la discriminación. Piénsese así en el peligro cierto de lo que podría suceder si se informatizara la actividad judicial, como se ha hecho ya en otros países y el contenido de los juicios de familia quedara registrado en los soportes magnéticos de las computadoras. El que ingresa ilegítimamente en un banco de datos y se apodera de ellos comete una acción tan reprochable contra el titular de esos datos como el que allana un domicilio sin orden judicial afectando el derecho a la intimidad del titular de esos datos.

Como lo señaláramos en un inicio, si bien la información es paradójal transparente, publicita y acrecienta las posibilidades de la verdad pero al mismo tiempo puede ser la mayor arma de control, de discriminación y de exclusión en las sociedades mediáticas y tecnológicas del siglo XXI. Si no se establece un sistema de control sobre los bancos de datos que almacenan información sobre personas todo el cuadro de derechos personales sería una mera declamación. Este sistema está organizado de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Sobre el sujeto del derecho al acceso a la información se discute si le corresponde sólo a las personas individuales o a las colectivas. Nosotros entendimos que, el acceso debe ser lo más amplio posible porque no hay razón alguna para efectuar restricciones en este sentido. Por lo cual el derecho a la información se les debe otorgar no sólo a las personas físicas, sino a las personas jurídicas con el objeto de proteger suficientemente los derechos de toda la sociedad. El artículo 43 de la ley de protección de datos personales establece que la presente ley tiene por objeto la salvaguarda de los datos personales, tanto de las personas físicas como jurídicas tratadas en registros o bancos de datos automatizados o no, de los sectores públicos o privados, o registrados en soporte físico susceptibles de tratamiento

automatizado o no, o mediante otras técnicas con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Nótase aquí que la protección de la ley de tutela sustancial, está dirigida, no sólo a proteger los derechos a la intimidad, a la reserva de vida privada, sino también al pleno ejercicio de todos sus derechos, siendo la protección en este sentido amplísima, no sólo respecto de las personas que protege, personas físicas o jurídicas, sino también de los derechos que tiende a preservar que no sólo están vinculados con los derechos personalísimos sino con el ejercicio y goce amplio de todos los derechos constitucionales;

b) El acceso a la información está referido, tanto a registros privados como a registros públicos, como respecto de archivos manuales o automatizados. Porque en todos los casos puede producirse la afectación de los derechos individuales o públicos en juego. Aquí está la primera diferencia con la Constitución brasileña de 1938, que sólo protege respecto de los registros públicos ampliándose la protección en el marco de esta ley protectora que estamos sancionando también a los registros privados;

c) La titularidad de los bancos de información tampoco debe ser diferenciada, no tiene sentido abrir los archivos privados y cerrar los públicos, o viceversa. Hemos tratado conjuntamente tanto los archivos públicos como los archivos privados;

d) La recolección de datos debe estar regulada por el principio de que su aplicación no puede apartarse de las finalidades a las cuales la recolección ha sido destinada. Finalidades que no pueden dejar de estar especificadas con claridad cuando se crean los registros. En este sentido la ley que sancionamos ha seguido el lincomiento de las leyes austríacas en su artículo 8º, danesa artículo 20, francesa artículos 19 y 11, en el sentido de la prohibición de utilizar los datos personales para otros fines. También se ha previsto que el almacenamiento de información no puede retenerse más allá del tiempo necesario para alcanzar los fines que se persigan. El principio de finalidad establece el necesario correlato de la prohibición de la interconexión de los registros, sean aquéllos públicos o privados, cuando la misma no hubiere sido autorizada;

e) Los registros en todos los casos son obligados a dar la información reclamada a los particulares ya sean estos privados o públicos que la soliciten cuando la información les concierne;

f) Queda establecido además, el principio de consentimiento para poder figurar en un banco de datos. Allí, se hace clara referencia a la calidad de los datos. En este sentido se establece que sólo podrán recogerse datos de carácter personal cuando los mismos fueran adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad legítima para los que se hubieran obtenido. En ningún caso podrán usarse para finalidades distintas de aquellas para los que hubieren sido recogidos los datos de carácter personal objeto de tratamiento. Se exige la exactitud y la actualización de modo tal que respondan con veracidad a la situación real del interesado y la temporalidad del registro de datos

en el sentido de que los mismos, deberán ser eliminados cuando hayan dejado de ser necesarios a los fines para los que hubieren sido reclamados;

g) Un principio central de la nueva ley es el consentimiento del interesado, en este sentido el artículo 6º establece, que el tratamiento de datos de carácter personal requerirá el consentimiento expreso del titular, salvo que una ley disponga lo contrario, el principio del consentimiento es central en la lógica protectora de los datos personales que estructura la presente ley. También se establece la plena revocabilidad del consentimiento prestado;

h) Se establece expresamente la ilicitud del tratamiento de datos cuando el interesado no hubiere prestado su consentimiento por escrito salvo que exista una voluntad inequívoca en este sentido; y el principio también del consentimiento informado, si el consentimiento se otorgará juntamente con otras declaraciones se deberá informar de ello expresamente por escrito al interesado y en instrumento separado. ¿Cuáles son los datos especialmente protegidos? Este ha sido un aspecto central sumamente debatido en la subcomisión en base al proyecto original. Aquí hay sobre los datos con mayor capacidad discriminatoria aquellos datos de nivel personal que revelan ideología, raza, religión, hábitos personales y comportamiento sexual. Hay en esto dos posiciones: una que sostiene que estos datos pueden ser registrados en la medida en que exista consentimiento expreso por escrito, consentimiento informado, del que vaya a ser titular de los datos; y una segunda postura aún más garantista y protectora que para evadir las hipotéticas presiones en la prestación de este consentimiento prohíbe en forma absoluta el registro de este tipo de datos. Esta última alternativa fue la adoptada por la presente ley cuando en su artículo 11, inciso 1º, establece: que no podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen ideología, raza, religión, hábitos personales y comportamiento sexual. El registro de este tipo de información sensible está prohibido por la ley, y, en consecuencia quien lo registre aparte de las acciones procesales de tutela, el registro de datos estará sometido a las sanciones que prescribe la presente ley y obviamente a la acción consecuente de daños y perjuicios. También se establece entre los datos especialmente protegidos, que no podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal, que revelen estado de salud, situación patrimonial y obligaciones tributarias; salvo que mediaren razones de interés general y así lo disponga una ley o exista consentimiento del interesado. También son objeto de especial protección los datos de carácter personal relativo a infracciones penales o administrativas, y que sólo podrán ser incluidos en registros o bancos de datos pertenecientes a las administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras. Es decir, los mismos no pueden estar contenidos en un banco de datos privados, por tener también enorme potencial discriminatorio. En materia de salud, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 sobre cesión las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados podrán tratar datos de carácter personal, relativos a la salud de personas que

los consulten o que pudieran ser tratados por los mismos; es la lógica excepción a la posibilidad de tener una historia clínica por parte de los médicos o salubridad;

4) Un aspecto importante de la ley es la seguridad de los datos y el deber de secreto. En este sentido se establece que el responsable del registro banco de datos deberá adoptar las medidas de índole técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su adulteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología aplicada. La naturaleza de los datos tratados y los riesgos a que estuvieran expuestos sean provenientes de la acción humana o del medio físico natural.

El artículo 14 además, establece el deber de secreto en el sentido en que los responsables y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos están obligados a guardar dicho secreto. Obligación que subsistirá después de finalizar sus relaciones con el responsable del registro o banco de datos. Se establece nuevamente enormes precisiones respecto a la cesión de los datos, al consentimiento y al conocimiento del interesado y en cuanto a los derechos de los interesados o titulares de los datos, se reconoce el derecho a la información en el sentido de que cualquier persona podrá conocer la existencia de registros o bancos de datos de carácter personal, su finalidad y la identidad del responsable.

También el derecho al acceso implicará derecho a solicitar y a obtener información de sus datos de carácter personal que conste en el registro o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes. Y por último el derecho de rectificación, eliminación y con-

servación de los datos. Dentro de los órganos de aplicación se encuentra en primer lugar una comisión bicameral, creada en el ámbito del Congreso Nacional, de seguimiento de protección de datos a los fines de garantizar la salvaguarda y protección de los derechos tutelados por la presente ley, la que será integrada por cinco diputados y por cinco senadores pertenecientes a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, cuyo reglamento será dictado por sus miembros.

El registro de los bancos de los datos se hará por registración en el ámbito del Boletín Oficial y la autoridad de aplicación previa reglamentación por parte de la comisión bicameral será el Defensor del Pueblo. Se ha querido así en la intención legislativa extraer un tema tan sensible y que tiene altísimo componente de discriminación y de control del ámbito del Poder Ejecutivo, para centrarlo en una figura conceptualizada en la nueva Constitución Nacional como garante de los derechos humanos, cual es el Defensor del Pueblo. Esto en cuanto a los aspectos sustanciales de la ley, y en cuanto a los aspectos procesales de la ley se ha establecido como una acción autónoma y específica si bien admite la denominación genérica de amparo está remitiéndose al procedimiento sumarisimo previsto en el Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación y apartándola de todos los criterios o principios que regularán la acción de amparo, de esta manera cada vez que exista una lesión a algunos de estos derechos tutelados en la ley, el particular cuenta directa, ordinariamente con el procedimiento sumarisimo previsto en el Código Procesal, Civil y Comercial con la característica de que en caso de apelación, las mismas tendrán efectos devolutivos: la ejecución de la sentencia no podrá ser suspendida o alterada por la interposición de un recurso de apelación.